

Gunther Dietz

“Desencuentros”, “encontronazos” y “reencuentros”: movimientos indígenas y organizaciones no-gubernamentales en México¹

Resumen: El presente trabajo analiza la a menudo conflictiva relación que desde los años ochenta se ha ido articulando entre los nuevos actores indígenas que en diferentes partes de México emergen a nivel regional, por un lado, y las organizaciones no-gubernamentales (ONG) impulsadas por actores urbanos que realizan proyectos de desarrollo rural en zonas indígenas, por otro lado. En el análisis, dichos conflictos se remontan al desigual trasfondo biográfico de sus respectivos protagonistas así como a sus dependencias de actores externos antagónicos que asumen funciones intermediadoras entre la población rural indígena y las agencias de desarrollo nacionales e internacionales. Se aporta un estudio etnográfico proveniente de la región purhépecha de Michoacán, en el cual se analiza la relación que ambos nuevos actores establecen entre sí así como con estas agencias exógenas de desarrollo rural. Dos estudios de caso, que han generado resultados diametralmente opuestos, son contrastados: el enfrentamiento que ocurre entre un tipo exógeno y clientelar de ONG, por un lado, y la *intelligentsia* indígena local, por otro lado, es comparado con un proyecto-piloto de colaboración estrecha entre ambos actores. Por último, la confluencia de ONG y organizaciones indígenas es analizada ante el trasfondo de la creciente “ciudadanización” de los movimientos sociales tanto urbanos como rurales. La observación electoral y la lucha por los derechos constitucionales de la población indígena están generando un novedoso modelo de “aprendizaje ciudadano” que logra superar el tradicional aislamiento de los pueblos indios del resto de la sociedad civil mexicana.

Summary: Since the eighties, specific relations of conflict and cooperation between the new indigenous agents which emerged in different parts of Mexico at regional and local levels, on the one hand, and non-government organizations (NGOs) managed by urban professionals for the planning and realizing of rural development projects in indigenous areas, on the other,

¹ Este trabajo presenta parte de los resultados obtenidos en un proyecto de investigación etnográfica-participativa sobre la génesis y evolución de nuevas formas de organización étnico-regional para el caso del movimiento purhépecha de Michoacán; cfr. Dietz (1999).

have been observed. Divergent interests, goal orientations and biographical backgrounds of the respective persons as well as the organizational and economic dependence of their efforts and activities upon external agents contributed to basic conflicts. A study based on ethnographic research in the Purhépecha region of Michoacán reveals the dynamic relations between both agents: the arduous ways to a more efficient cooperation of NGO professionals and the respective local/regional indigenous *intelligentsia* as well as to common decision processes have led, on both sides, to a certain emancipation from – national and foreign – official political institutions and tutelary organizations.

1994, este año decisivo, “maldito” e “interminable” (Castañeda 1994), ha sido declarado por el periódico mexicano *La Jornada* como “año de las ONG”, de las organizaciones no-gubernamentales activas en México. A pesar de la aparición, mediáticamente cronometrada, del *Ejército Zapatista de Liberación Nacional* (EZLN) y de su impacto en los movimientos indígenas, por lo menos la prensa capitalina independiente consideraba que lo novedoso de este año de cambios y transformaciones no residía en el resurgimiento de los movimientos indígenas, sino en la consolidación definitiva de formas de organización independientes en el seno de la sociedad civil mexicana.

Inmediatamente después del enfrentamiento armado entre el EZLN y el Ejército Mexicano, diversas ONG arraigadas tanto en Chiapas como en la Ciudad de México generan un *Espacio Civil por la Paz* (ESPAZ), dedicado a canalizar ayudas humanitarias así como campamentos de observadores nacionales e internacionales hacia dentro de la cercada región de conflicto. Su principal actividad en estos primeros meses, sin embargo, consistía en crear y aprovechar “cordones humanos” como espacios desarmados de protección que permitirían establecer las primeras negociaciones entre los representantes zapatistas y el gobierno mexicano. A estas negociaciones, que en 1995 desembocarían en el denominado *Diálogo de Sacam Ch'en*, el EZLN también logra integrar a múltiples representantes de los nuevos movimientos indígenas como sus “asesores”. Así, en el contexto de las negociaciones, por primera vez surge una red de organizaciones de la sociedad civil que abarca tanto a los movimientos indígenas como a las ONG urbanas. No obstante, ante el aparente estancamiento en el que se encuentran las negociaciones desde que el gobierno de Ernesto Zedillo se negara a reconocer los resultados de *Sacam Ch'en*, cabe preguntarse por el tipo de relación establecida antes y después de 1994/95 entre ambos actores, entre las ONG mexicanas de origen urbano, por un lado, y las nuevas organizaciones indígenas, por otro.

“Desencuentros” biográficos

Tanto el “boom” de las ONG como la reaparición de los movimientos indígenas son retrazables hasta la segunda mitad de los años setenta y la primera mitad de los ochenta. Ambas pautas organizativas no sólo aparecen de forma paralela y simultánea, sino que a menudo surgen delimitándose mutuamente. El emergente potencial conflictivo que se irá acumulando entre ambos actores queda ilustrado por la antagónica evolución que toman las biografías de los protagonistas de cada uno de estos movimientos:

- El movimiento indígena resurgido desde comienzos de los años noventa a nivel tanto nacional como internacional, paradójicamente se remonta en gran parte a iniciativas gubernamentales. Para limitar la creciente influencia que los actores no-gubernamentales y –particularmente en Chiapas– eclesiásticos estaban ganando en las formas de organización locales y regionales, aún bajo el gobierno de Echeverría (1970-1976) y con el apoyo decisivo del partido-Estado y de las instituciones indigenistas del Estado se crean los denominados *consejos supremos* para cada una de las etnias indígenas de México (Barre 1983; Mejía Piñeros/Sarmiento Silva 1987). Una vez centralizados en 1975 bajo la tutela institucional del *Consejo Nacional de Pueblos Indígenas* y después de haber sido sometidos en 1979/80 al estricto control gubernamental y partidista, estos gremios indígenas exógenos subsisten sin impacto local alguno. Por ello, sólo son redescubiertos y movilizados periódicamente en épocas de campaña electoral, para canalizar esporádicamente las reivindicaciones locales “hacia arriba”. Sin embargo, se tiende a infravalorar la crucial importancia de estos primerizos *consejos* locales y regionales, que reside en su función indirecta de haber servido de “escuela” y “trampolín” para los protagonistas del actual movimiento indígena independiente. Así, desde finales de los años setenta, en el entorno de las instituciones indigenistas y de sus organizaciones intermediarias se viene fermentando el nacimiento de una novedosa “*intelligentsia* indígena”, una especie de “élite” de maestros bilingües y promotores culturales localmente arraigados, pero fuertemente orientados hacia el Estado-nación (Dietz 1997).
- Simultáneamente y en consciente oposición a este nuevo actor, inducido desde el Estado y orientado hacia el mismo, en las regiones indígenas de México surge asimismo desde finales de los setenta una segunda pauta organizativa, de origen igualmente exógeno. Las hoy “clásicas” organizaciones tanto de los movimientos de campesinos-comuneros como aquellos de los jornaleros y campesinos sin tierra² nacen al amparo y con el fuerte apoyo personal de determinados “asesores

² Para detalles sobre estos movimientos campesinos, cfr. Bartra (1985); Harvey (1990) y Otero (1989).

externos”, que sin excepción alguna provienen de la *intelligentsia* urbana y estudiantil del Distrito Federal, de Monterrey y de otras ciudades del país (Cazés 1994; Monsiváis 1987). Esta generación de los –literal o simbólicamente– “sobrevivientes” de la masacre de Tlatelolco, que desde la represión militar de 1968 rehusa toda cercanía gubernamental, aspira a hallar en la población rural marginada un nuevo “sujeto revolucionario”. Siempre dependiendo de su idiosincrasia programática y su específica orientación ideológica, los nuevos movimientos campesinos buscan establecer alianzas con partidos maoistas o trotskistas así como con comunidades cristianas de base.³ Desde comienzos de los años ochenta, sin embargo, el éxito de este tipo de movimiento, expresado en un sinfín de tomas de tierra y en redistribuciones de tierras jurídicamente conquistadas, obliga a sus “asesores externos” a pasar de una estrategia de polarización mediante conflictos de tierras a medidas concretas de desarrollo rural; de lo contrario, correrían el riesgo de perder el apoyo de su base, “pacificada” por haber obtenido las anheladas tierras (Fox/Hernández 1992). En este contexto, al margen del persistente movimiento jornalero, pero en el seno de las “clásicas” regiones campesinas se constituye a nivel tanto local como regional una amplia gama de *organizaciones de productores* (Martínez Borrego 1991). Esta pauta organizativa recluta sobre todo al “campesinado medio” (García 1991), una emergente capa de campesinos que disponen de tierras suficientes como para desarrollar una agricultura, ganadería o silvicultura potencialmente comercializable; sus problemas por tanto ya no están centrados en conflictos jurídicos por tierras, sino que giran en torno a enfrentamientos comerciales con *coyotes* y demás monopolistas. Este nuevo tipo de campesinado descubre en los antiguos “asesores externos” del movimiento campesino clásico un aliado experimentado. Nace así una red altamente heterogénea de formas de organización rural, conformada, por un lado, por los gremios locales de productores y, por otro lado, por ONG de asesores externos de origen urbano (Alatorre/Aguilar 1994). Dichas ONG comienzan a consolidarse cuando la primera generación de los “emigrantes” urbanos del ’68 se ve reforzada por una segunda generación, formada por aquellos que tras el temblor sísmico y social de 1985 descubren en el desarrollo rural un nuevo ámbito de acción (Beck 1991).

A lo largo de los años ochenta, los contactos entre los protagonistas de ambas formas de organización permanecen esporádicos y localmente limitados. Ello se debe al abismo biográfico existente entre una *intelligentsia* urbana, por un lado, emigrada hacia las regiones indígenas para buscar deliberadamente la lejanía del omnipresente Estado, y una nueva *intelligentsia* indígena, por otro lado, necesi-

³ Las líneas evolutivas generales de las diferentes tendencias de la izquierda mexicana son analizadas por Carr (1996); Castañeda (1993) y Zermeño (1993).

riamente cercana a las instituciones gubernamentales que la generó y cuyos protagonistas por definición sólo pueden desarrollar sus carreras profesionales dentro del indigenismo oficial. Otro factor que ha contribuido decisivamente a separar a ambos actores reside en su respectiva actitud ante la Iglesia Católica:

- Una gran parte de las organizaciones de productores y de las ONG, de forma directa – por ejemplo, a través de *Acción Católica* o de iniciativas diocesanas influenciadas por la *Teología de la Liberación* –o indirecta– gracias al impulso de las comunidades cristianas de base o al amparo del movimiento catequista – se remonta al ámbito de la Iglesia Católica (Núñez 1990). Bajo el impacto del *Concilio Vaticano Segundo* de 1965 y de la *Conferencia Episcopal de Medellín* de 1968, y según la específica tendencia política y teológica de la diócesis en cuestión, los grupos cristianos trabajan abierta o encubiertamente dentro del espectro de las ONG y de las organizaciones campesinas (Canto Chac 1991; Muro 1994).
- Aquellos indígenas que primero como maestros bilingües en sus regiones de origen y luego como funcionarios desempeñan su labor profesional en la *Secretaría de Educación Pública* y/o en las instituciones indigenistas, siempre mantienen distancia hacia los grupos cristianos.⁴ Como intermediarios aún leales del Estado-nación surgido de la Revolución de 1910, los nuevos actores indígenas reproducen fielmente la actitud laicista y anticlerical convertida en programática gubernamental desde la *Guerra de los Cristeros* de 1929. Además, para desarrollar una política de educación bilingüe, el Estado mexicano en su fase indigenista inicial había recurrido abiertamente al apoyo del *Instituto Lingüístico de Verano*, de cuño evangelista y conservador, cuyo recurso a las traducciones de la Biblia a lenguas indígenas como eficaz método misionero fue adoptado por las “misiones culturales” del primer indigenismo postrevolucionario. La consecuente simpatía que desde entonces expresan varios representantes de la élite intelectual indígena hacia los grupos evangelistas refuerza aún más su actitud anti-católica.

“Encontronazos” entre intermediarios

Estas diferencias contextuales en las cuales surgen como nuevos actores sociales rurales, por una parte, los activistas y veteranos de las ONG y, por otra parte, los futuros protagonistas de los actuales movimientos indígenas, estructurarán, a la vez, los primeros conflictos que desde mediados de los años ochenta enfrentan a ambos en diversas regiones indígenas de México. Para evitar dichos conflictos, ambas

⁴ Para detalles sobre las cambiantes políticas y programas del *indigenismo*, cfr. Dietz (1995).

pautas organizativas se establecen en ámbitos opuestos: Mientras que la *intelligentsia* indígena se autolimita a actividades y reivindicaciones educativas y culturales, luchando por una biculturalización real del currículum escolar, sólo nominalmente bilingüe y bicultural desde los años setenta, las nacientes ONG se dedican a ampliar los canales de comercialización de los productos de sus beneficiarios campesinos, a experimentar con tecnologías agropecuarias y forestales localmente adaptadas y a (re-)introducir formas de cultivo ecológicamente sostenibles.

Dado que las instituciones gubernamentales únicamente fomentan a aquellos *ejidos* y gremios de productores que se encuentran firmemente integradas en el partido-Estado, ya desde un principio se genera una “división laboral” entre la *Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos* y las ONG: las organizaciones leales al régimen se dirigen a las instituciones públicas así como a la confederación campesina del partido-Estado, mientras que aquellos productores que han adquirido su tierra gracias a su lucha dentro del movimiento campesino independiente sólo serán apoyados por las ONG a través de sus “grupos de base”.

Sin embargo, después de desencadenarse la crisis del petróleo y una vez atrapado por las imposiciones de las instituciones crediticias multilaterales, el gobierno de Miguel de la Madrid (1982 - 1988) comienza a protagonizar un decisivo giro ideológico y programático: el hasta entonces omnipresente Estado-nación, que había logrado integrar a la amplia mayoría de la población rural en sus instituciones gubernamentales y/o partidistas, viene convirtiéndose en un cada vez más alejado, ausente y tecnocrático “Estado neoliberal”. Tanto en el ámbito del desarrollo rural como en su política indigenista de integración, la nueva élite en el poder declara al Estado como exento de responsabilidades. Los primeros programas integrales de desarrollo rural regional, aún iniciados bajo la presidencia de Echeverría, son sustituidos por medidas básicamente asistencialistas, destinadas a pacificar puntualmente situaciones de “explosividad” social, sin jamás poder generar un capital reinvertible por la propia unidad doméstica campesina. Por ello, ya a finales de los años ochenta, la política de desarrollo se convierte en asunto casi exclusivo de las ONG y de las *organizaciones de productores*, fuertemente apoyadas por la política de concertación implementada por el gobierno de Salinas de Gortari (1988-1994) para poder dismantelar y retirar las instituciones públicas de fomento de aquellas regiones consideradas “no productivas”.⁵

El subsecuente “boom” de las ONG coincide con el inicio de un cauteloso proceso de emancipación protagonizado por la élite intelectual indígena para desprenderse de su tutela oficial. La definitiva emancipación de esta *intelligentsia*

⁵ La controvertida política de *concertación* es discutida por Canabal Cristiani (1991), Harvey (1993) y Paré (1990).

indígena es posible gracias a la contradictoria coincidencia entre su institucionalización en el aparato gubernamental, por un lado, y la disolución de este mismo aparato, por otro. Desde comienzos de los años ochenta, la élite indígena había logrado conquistar cada vez más espacios dentro de las instituciones indigenistas y educativas hasta llegar a controlar direcciones generales y departamentos enteros. Los conocimientos y habilidades técnicas, burocráticas y políticas adquiridas dentro de las instituciones evidencian su carácter de “arma de doble filo” cuando el Estado neoliberal disuelve y/o margina por completo las dependencias gubernamentales en las que se desenvolvían los maestros, funcionarios y políticos indígenas. Cuando el gobierno neutraliza definitivamente a la política indigenista, desdibujada al ser integrada en el *Programa Nacional de Solidaridad* (PRONASOL), de cuño asistencialista, y ante la persistente discriminación y marginación sufrida por la élite indígena, ésta en su mayoría abandona su tutela institucional y su lealtad al Estado-nación, re-funcionalizando sus conocimientos estratégicos dentro de formas de organización independientes.

El redescubrimiento de la región y comunidad de origen que así se inicia y la consciente reintegración en las estructuras consuetudinarias y en la jerarquía de cargos comunales, por otra parte, desencadena conflictos directos –y a menudo personales– entre ambos actores experimentados en la vida urbana. Tanto los activistas de las ONG como los integrantes de la *intelligentsia* indígena luchan por obtener y mantener el apoyo de la base campesina de la población local. Mientras que las ONG dependen fuertemente de esta base como destinatarios y beneficiarios de sus proyectos de desarrollo para asegurarse el beneplácito y el apoyo financiero de sus agencias financiadoras nacionales y a menudo internacionales, los maestros bilingües reintegrados y los antiguos funcionarios indigenistas movilizan a sus vecinos campesinos para que participen en las actividades políticas de la comunidad indígena.

“Encontronazos” entre modelos de desarrollo

Esta “lucha por la base” se polariza no sólo por el mero choque entre intereses opuestos de intermediación (Álvarez Gándara 1992). Al conflicto subyacen utopías sociales a menudo antagónicas. La “vieja guardia” compuesta de los activistas de las ONG suele dirigirse a la unidad doméstica campesina como destinatario privilegiado de su “política de proyectos”, con el objetivo casi siempre explícito de convertir las empresas familiares minifundistas –supuestamente improductivas y atomizadas– en cooperativas económicamente rentables. Tanto para las organizaciones de inspiración maoísta como para las ONG originadas por comunidades cristianas de base, el ideal subyacente lo constituye la comunidad igualitaria de individuos que poseen y producen de forma colectiva. Aun cuando este ideal de establecer cooperativas de

producción, comercialización y consumo en la práctica es abandonado por casi todas las ONG debido a la persistente resistencia de la misma unidad doméstica campesina, el “discurso cooperativista” sigue predominando en un gran número de ONG y en sus *organizaciones de productores*.

Este discurso es tajantemente rechazado por la élite intelectual indígena, ahora reincorporada a sus comunidades, precisamente porque para las comunidades indígenas, en la práctica el cooperativismo igualitarista ha ido generando las mismas consecuencias obtenidas por la tradicional política integracionista del Estado-nación. Tanto en la política agropecuaria y forestal como en el fomento a las artesanías, ya desde los años treinta los proyectos indigenistas se vienen implementando bajo la forma organizativa de cooperativas de producción o de comercialización. Su objetivo explícito consiste desde entonces en re-educar al campesino “testarudo” e “individualista”, convirtiéndolo en parte de un proletariado rural de masas jornaleras o asalariadas homogéneas, dóciles y sólo así integrables en la economía de mercado. La cercanía de este discurso pseudo-socialista, que caracteriza al Estado-nación postrevolucionario, al cooperativismo de las ONG ocasiona desde finales de los años ochenta un enfrentamiento cada vez más abierto entre dos modelos –ambos disidentes– de desarrollo rural:

- Por una parte, muchas ONG así como los “asesores” del “campesinado medio” promueven un modelo de “apropiación colectiva del proceso de producción”, una apropiación que ha de ser protagonizada por representaciones gremiales supralocales de las unidades domésticas partícipes (Moguel 1992). Este modelo en su origen había sido concebido como una estrategia potencialmente revolucionaria en la lucha contra las cadenas privadas y públicas de intermediación capitalista, que serviría para “concienciar” a las masas campesinas de México (Rosa 1982). Sin embargo, es precisa y paradójicamente esta estrategia la que bajo la política de *concertación* del gobierno de Salinas de Gortari y de su programa PRONASOL se convierte en el elemento crucial de la lucha interna desplegada por los tecnócratas neoliberales contra los “dinosaurios” monopolistas del partido-Estado. A lo largo de dicha lucha contra el Estado como “enemigo de clase”, acaban confluyendo perfectamente la programática maoísta con la neoliberal.
- Por otra parte, aquellos representantes de la *intelligentsia* indígena que se han ido autoemancipando de su anterior tutela gubernamental favorecen un modelo alternativo, que a nivel discursivo –y sobre todo en el contexto mediático de los debates continentales sobre el carácter del *Quinto Centenario*– reivindica la persistencia y necesaria descolonización de los pueblos indígenas, lo cual obligaría a redefinir al Estado-nación mexicano como una entidad “plurinacional”. A nivel de la praxis, sin embargo, no es la etnia como tal, sino la comunidad local la que constituye el principal y a menudo único horizonte

identitario. Por consiguiente, mecanismos consuetudinarios de la política local tales como la rotación de los cargos comunales, la reciprocidad y la voluntaria participación de las unidades domésticas campesinas –concebidas como autónomas– en las actividades de común interés intralocal son revitalizados y combinados con nuevos elementos de origen urbano:⁶ el derecho de voz y voto no sólo para los “cabezas de familia”, sino igualmente para las mujeres y los jóvenes solteros así como la complementariedad entre asambleismo plenario y comisiones temáticamente especializadas, un rasgo organizativo adoptado de experiencias obtenidas durante la participación en el movimiento magisterial disidente.⁷ En vez de reivindicar la integración –más o menos igualitaria– de la población rural en los existentes mercados nacionales e internacionales, este modelo “comunalista” insiste en el reconocimiento de la soberanía de la comunidad como tal y en su necesidad de renegociar las relaciones entre un Estado cada vez más distante y una población local cada vez más emancipada.

Comunidad y organización de productores en la Meseta Purhépecha

Un caso proveniente de la región purhépecha, ubicada en el occidental Estado mexicano de Michoacán, ilustra el choque entre ambos modelos de desarrollo. En Paracho, en pleno corazón de la Meseta Purhépecha, ya a finales de los años setenta se instala un grupo de seis asesores con experiencias organizativas ganadas en organizaciones campesinas nacionales, para articular al campesinado purhépecha en torno a una *organización de productores*.⁸ La primera toma de contacto con la futura “base” se establece en 1979, cuando un grupo de mujeres de la comunidad de Urapicho necesita un apoyo externo para solicitar la conexión de su comunidad al sistema intercomunal de agua potable. La reivindicación rápidamente es retomada en otras comunidades que padecen la misma escasez, por lo cual los asesores coordinan reuniones en cada una de las comunidades hasta conformar un llamado *Comité de Pueblos*. Aunque el comité logra movilizar a miles de mujeres en una toma multitudinaria de los pozos y finalmente obtiene el acceso al agua, la participación de la base se desvanece enseguida. En su autoevaluación crítica, los asesores atribuyen la esporádica participación a la falta de una “conciencia proletaria” entre los purhépecha (Bojórquez/Cardoso/Cardoso s.f.).

Como consecuencia, los promotores del Comité de Pueblos deciden trasladar la lucha del ámbito infraestructural a la esfera de la producción agrícola. Al igual que

⁶ Para ejemplos etnográficos de esta transformación de la comunidad, cfr. Dietz (1999).

⁷ Los movimientos magisteriales son analizados por Cook (1996) y Foweraker (1993).

⁸ Los siguientes detalles proceden de mis propios datos etnográficos, ampliados por Alonso Salmerón (1993); Bojórquez/Cardoso/Cardoso (s.f.), y Cervera Arce (1992).

los asesores de *organizaciones de productores* en otras regiones del país, se retomala estrategia de *Línea Proletaria* y *Línea de Masas* de aprovechar la dependencia crediticia y comercial que sufre el campesino frente al Estado para ir convirtiéndolo en un proletario que sigue trabajando su propia tierra, pero que *de facto* mantiene una relación obrero-patrón con la agencia gubernamental de la que obtiene el crédito-“salario” (Cervera Arce 1992). Por ello, en 1981 reaparece el comité, ahora denominado *Comité de Agricultores Purhépechas* (CAP), para defender a los campesinos primero de Urapicho y luego de otros pueblos de la Meseta en su lucha burocrática contra la banca pública de desarrollo, para obtener indemnizaciones ante las pérdidas sufridas en el último temporal. El CAP moviliza a los campesinos afectados y después de la toma de la sucursal regional del banco de desarrollo, éste efectivamente autoriza a la aseguradora a pagar las indemnizaciones. Aunque con la acción el CAP crece hasta comprender agricultores de veinte comunidades de los municipios de la Meseta, el intento de convertir el campesino en un trabajador asalariado fracasa porque la gran mayoría del campesinado purhépecha permenece en la economía de subsistencia y jamás obtiene crédito alguno.

Para paliar este problema, el CAP abandona sus actividades de fomento agrícola y participa plenamente en un programa de reforestación promovido por gobierno del Estado. Desde 1983, se invita a las comunidades á formar *Grupos Cívicos Forestales* (GCF), cuya tarea consiste en controlar la tala ilegal de bosque, prevenir incendios forestales y detectar aserraderos ilegales. Como el gobierno se compromete a remunerar por lo menos en parte las actividades de vigilancia forestal, el CAP ve en este programa una posibilidad más para incentivar la monetarización de la economía de subsistencia local. Mediante un rígido esquema vertical de organización, los miembros del CAP controlan gran parte de los GCF, por lo cual incluso llegan a establecer un comité regional que integra unos 400 grupos locales (Alonso Salmerón 1993).

El control de los grupos locales por el CAP, en 1985 rebautizado como *Comité de Productores Purhépechas* (CPP), desencadena conflictos intracomunales, puesto que a menudo ni siquiera las autoridades locales electas forman parte de dichos grupos. Así, los GCF se establecen como poderes paralelos al margen de la comunidad. Ello resulta aún más problemático por la importancia económica que adquieren muchos de estos grupos: al monopolizar las rondas de vigilancia, los GCF rápidamente se convierten en un eslabón más de la cadena de “mordidas” que el talador paga para proseguir con sus actividades semi-clandestinas.

Las masivas movilizaciones de protesta realizadas por el CPP en 1986 para conseguir que el programa de los GCF continúe no logran su objetivo: la nueva ley federal no prevé esta figura organizativa, con lo cual el CPP se ve forzado a cambiar nuevamente de terreno de acción. Gracias a un crédito otorgado en 1987 por una ONG nacional que centra sus actividades de apoyo a campesinos en créditos y fondos revolventes de autofinanciamiento, el CPP inicia un amplio proyecto de crear

un *Banco Purhépecha*: ante las experiencias negativas que los campesinos han tenido con la banca pública, el banco del CPP ofrece un “crédito-puente” a 80 agricultores para que éstos puedan financiar su siembra y devolver el crédito mediante el pago de parte de la cosecha a una bodega del CPP; el monto obtenido por la venta del producto almacenado conformaría un nuevo crédito para otros campesinos. Sin embargo, como los precios de los insumos aumentan repentinamente, mientras que el precio del maíz sigue cayendo, incluso los créditos de la primera entrega no se pueden retornar, con lo cual fracasa el fondo común.

Este fracaso y el correspondiente endeudamiento con la ONG donante obliga al CPP a buscar nuevas fuentes de financiamiento, que encontrará a partir de 1989 en los fondos del PRONASOL. Para ello, el CPP crea 23 “grupos organizados” de productores que reciben un crédito, ingresado en una cuenta corriente bancaria y con un plazo fijo. Para controlar el uso del crédito por sus beneficiarios y garantizar el reintegro del dinero, a la vez se impulsa la subsunción del trabajo campesino bajo formas empresariales. Surge así la *Sociedad Cooperativa “Marku Anchekoren”*, una cooperativa de más de 600 miembros repartidos por 16 comunidades. Paradójicamente, con esta iniciativa los asesores –ahora bajo una perspectiva “revolucionaria”– reproducen las mismas estrategias proletarizadoras desarrolladas por el primer indigenismo desarrollista para convertir el campesino-artesano en un trabajador asalariado.

Y al igual que en el caso de las cooperativas indigenistas, el problema principal reside en la escasa participación de la bases. Sin el constante flujo de recursos externos hacia la cooperativa, *Marku Anchekoren* desaparecería de un día a otro sin repercutir a largo plazo ni en las formas de organización de la unidad doméstica purhépecha ni en su falta de “conciencia de clase”. Con ello la estructura interna del CPP refleja una profunda dicotomía entre un asambleismo de base y un grupo restringido de líderes omnipresentes (Cervera Arce 1992).

Otro rasgo distintivo reside en el papel que juega al interior de la comunidad purhépecha. Organizaciones como el CPP fomentan el divisionismo intralocal al no someterse a las decisiones ni de las asambleas comunales ni de las autoridades civiles o agrarias locales, ya que el CPP abiertamente renuncia a ponerse a disposición de la voluntad de las instancias locales. Como las comunidades carecen de la visión vanguardista necesaria para impulsar un “proyecto político de verdadero cambio” (Alonso Salmerón 1993), el CPP prefiere fomentar sólo a determinados miembros de cada comunidad –los campesinos medios que pueden tener acceso a créditos– para crear nuevos “grupos productivos” que a su vez generen estructuras paralelas de poder local: la perspectiva revolucionaria, en definitiva, es inviable si la toma del poder político “no tiene eco sin el control del poder económico” (Alonso Salmerón 1993).

A nivel intralocal, esta estrategia socava los mecanismos de toma de decisiones internos de la comunidad purhépecha. Como la membresía en la cooperativa y en el

“grupo productivo” es individual, la comunidad una vez más se queda al margen de la actividad de la *organización de productores*. Ello genera nuevos conflictos –tanto entre la asamblea comunal y los maestros bilingües que la apoyan, por un lado, y los comuneros que participan en el CPP, por otro, como entre la comunidad y la cabecera municipal– cuando, por ejemplo, en el municipio de Paracho gran parte de los fondos gubernamentales de PRONASOL son canalizados hacia los “grupos productivos” del CPP y sus miembros individuales.

La similitud entre los proyectos económicos impulsados por el CPP y la política integracionista del Estado, que coinciden en el fin último de descampesinizar al campesinado indígena para integrarlo en la sociedad nacional como parte del proletariado, hace posible esta “división de trabajo” entre la política gubernamental del PRONASOL y el CPP. Tanto a nivel regional como a nivel nacional, las *organizaciones de productores* tienen que enfrentarse al desafío de no ser completamente absorbidos por el aparato gubernamental y su hábil capacidad de *concertación*. La insistencia en la primacía de lo económico y “productivo”, por una parte, excluye a un gran número de campesinos de estos nuevos procesos de organización. Sin embargo, por otra parte, también corre el riesgo de convertirse en un gremio “despolitizado” de agricultores acomodados.

El principal problema que subyace a la “filosofía” de las organizaciones de productores, la estrategia de la “apropiación del proceso de producción” como vía para la toma del poder, es la inquebrantable fé de los asesores y cuadros en la necesaria proletarianización del campesinado indígena. Los purhépecha ingresan en las nuevas *organizaciones de productores* precisamente por haberse resistido –y seguir resistiéndose– durante medio siglo a las políticas públicas de proletarianización, salarización y sindicalización forzada. El objetivo de los campesinos purhépecha –tanto de los “medios” como los que son forzados a permanecer en la subsistencia– consiste en recuperar el control del proceso de producción, pero no como cooperativa o sindicato, sino como unidad doméstica. Ésta, y no la “clase obrera”, sigue siendo el único actor económico presente en las comunidades que lucha por obtener un mayor grado de autonomía frente a los intermediarios, sean estos gubernamentales o no-gubernamentales. Como consecuencia, el “malentendido” de los cuadros exógenos engendra procesos de organización importantes en la región, pero estos procesos acaban desvinculándose por completo de los objetivos principales de sus promotores. El modelo “comunalista” impulsado por la *intelligentsia* indígena, que respeta la autonomía de la unidad de producción campesina como cédula básica de la soberanía de la comunidad, en gran parte de las regiones indígenas logra imponerse frente a las pautas exógenas de organización.

“Reencuentros” en la arena política

Es finalmente la disidencia partidista del llamado *neocardenismo*, independizada en 1987/88 del partido-Estado, la que logra por lo menos acercar a nivel nacional a los activistas de las ONG y *organizaciones de productores*, por un lado, y a la élite indígena recomunalizada, por otro. Dado que dicha disidencia partidista, por lo menos en sus inicios, se autodefine como un nuevo tipo de “partido en movimiento” que como plataforma se abre a movimientos sociales tanto rurales como urbanos de composición altamente heterogénea (Cornelius 1996; Tamayo 1990), su abanico organizativo se convierte en un primer marco de referencia común que propicia alianzas personales y políticas más allá de las “trincheras” que siguen separando a los distintos movimientos. Aun cuando la polarización intralocal persiste e incluso se profundiza a raíz de la colaboración de varias *organizaciones de productores* en las medidas del PRONASOL, el evidente fraude electoral conjuntamente sufrido en 1988 abre una nueva arena de actividades de común interés. Son sobre todo las ONG dedicadas hasta entonces únicamente a proyectos de desarrollo rural así como los candidatos indígenas de la plataforma *neocardenista* directamente afectados por el fraude, los que de forma coordinada crean una red de organizaciones de la sociedad civil dedicada a la observación electoral (Bartra 1992; Durand Ponte 1994). Desde su primera aparición en las elecciones municipales de 1989, esta novedosa *Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia* logra superar los limitantes estructurales que hasta entonces padecían ambas pautas organizativas:

- por un lado, la gran mayoría de las ONG desplegaba una marcada *proyectitis*, sufriendo un evidente contraste entre su retórica transformacionista e incluso revolucionaria, por una parte, y su autolimitación a proyectos mínimos con escaso impacto multiplicador más allá de su clientela directamente beneficiaria, por otra parte (Alatorre/Aguilar 1994);
- y, por otro lado, el aislamiento regional que padecía el nuevo movimiento indígena, que logra movilizar a comunidades enteras, por ejemplo para la resistencia frente a la contrarreforma agraria de Salinas de Gortari, pero que, a la vez, pasa desapercibido a nivel nacional sobre todo por los importantes movimientos sociales extraregionales (Dietz 1996).

No obstante, dado que *Convergencia* como plataforma de observación electoral y su ampliación en el frente de organizaciones agrupadas desde 1993 como *Alianza Cívica* permanecen dominadas por los activistas de las ONG de desarrollo, la colaboración con organizaciones indígenas sigue siendo altamente esporádica y limitada a contactos meramente personales. La decepción y el sentimiento de impotencia ante la persistente práctica del omnipoderoso fraude de la *ingeniería electoral* oficialista (Calderón Alzati/Cazés 1996) contribuye a concienciar a gran parte de la población local acerca de sus derechos como ciudadanos mexicanos; sin

embargo, como el panorama de partidos políticos apenas ofrece alternativas cualitativas a la corrupción, al caciquismo y al clientelismo rural, tanto los comuneros campesinos como la élite intelectual se autolimitará a fortalecer a su respectiva comunidad indígena y a sus coaliciones regionales con comunidades vecinas.⁹

“Reencuentros” en la praxis regional: la cuenca de Pátzcuaro

Un caso excepcional en el que a raíz del diálogo directo entre una ONG y sus “destinatarios” comunales se generan nuevas formas de organización se viene desarrollando ya desde inicios de los años ochenta en la cuenca lacustre de Pátzcuaro.¹⁰ En esta subregión, dicho diálogo se remonta a un heterogéneo frente de resistencia surgido contra la planeada –y luego impedida– instalación de un reactor nuclear en una comunidad purhépecha a comienzos de los años ochenta. Este frente había impulsado un primer contacto e intercambio personal entre un grupo de intelectuales y profesionistas residentes en las ciudades de Pátzcuaro y Morelia, por un lado, y campesinos-pescadores de varias comunidades del lago –los afectados directos del proyectado reactor–, por otro lado. Este diálogo fue promovido tanto por algunos miembros de comunidades eclesíásticas de base como por un grupo de jóvenes estudiantes purhépecha que había logrado que su comunidad, Santa Fé de la Laguna, rechazara el proyecto nuclear.

Como resultado de este primer intercambio, ambas partes coincidían en la necesidad de ampliar las inquietudes medioambientales más allá de la lucha antinuclear y de promover acciones prácticas que contribuyan a frenar el acelerado deterioro de la base ecológica y económica de la cuenca lacustre. Comienza así un novedoso proceso de enseñanza recíproca: mientras que los pescadores obligan a sus interlocutores a “ensuciar” las concepciones romanticistas y muchas veces etéreas de los ecologistas de las ciudades” (Toledo 1992), ellos a su vez son incentivados a percibir sus problemas económicos bajo una mirada ecológica. A diferencia de otras ONG y *organizaciones de productores* como en el caso del CPP, el “encuentro” entre estos dos grupos tan diferentes entre sí no se pretende institucionalizar en una sola organización en la cual los ecologistas urbanos se convertirían en cuadros “asesores” y los pescadores serían degradados a formar la “base”; sino que el proceso de “institucionalización” transcurre de forma paralela:

⁹ Para el conjunto de la sociedad civil mexicana, este proceso de autoaislamiento, a menudo acompañado por una tendencia hacia la desmovilización, es analizado por Zermeño (1994; 1996).

¹⁰ La reconstrucción de esta experiencia organizativa se basa en mis propios datos etnográficos así como en ORCA (1992), Pizá (1988) y Villarreal/Oud (1992).

- Ya en 1982, una reunión de representantes de 23 comunidades, en su mayoría pescadores, constituye la *Organización Ribereña contra la Contaminación del Lago de Pátzcuaro* (ORCA). Aparte de una *mesa directiva* de tipo colectivo, se forman comités de trabajo dedicados a los principales problemas ecológicos de la región: el tratamiento de basuras, la falta de procesamiento de las aguas negras, la deforestación y la necesidad de impulsar la agricultura de terracería para frenar la erosión. Aunque la mesa directiva de ORCA cuenta con la asesoría “técnica” de los interlocutores urbanos, toma sus decisiones de forma independiente. Esta autonomía se evidencia cuando poco después de su creación un “asesor” logra convencer al entonces presidente de la mesa de que ORCA debería formar parte de una organización campesina exógena y participar en las huelgas y plantones que ésta realiza en Morelia. Apenas un año después, una asamblea general de todas las comunidades partícipes en ORCA decide desvincularse completamente de la organización campesina. Desde entonces, cada vez que surgen tensiones entre la mesa directiva y las comunidades que participan en ORCA, se procura reformar el funcionamiento interno de la organización. Así, aparte de la mesa misma, formada desde la última reforma por dos miembros de cada subregión lacustre, se crean comités subregionales en los que cada comunidad envía un representante, designado a tales efectos por su asamblea comunal. Este sistema segmentario regional logra estabilizar la participación de la gran mayoría de las comunidades lacustres.
- De forma simultánea, el grupo de profesionistas urbanos que trabaja en Pátzcuaro en una agencia de desarrollo gubernamental y que desde las movilizaciones contra el reactor mantiene relaciones estrechas con los pescadores se independiza de su agencia. Gracias a un primer apoyo financiero externo, el grupo en 1983 se constituye como ONG. Este *Centro de Estudios Sociales y Ecológicos* (CESE) coordinará desde entonces sus actividades de investigación y desarrollo con ORCA. Con ayudas provenientes tanto de instituciones educativas gubernamentales como sobre todo de fundaciones y ONG europeas y norteamericanas, CESE logra contratar a más de diez profesionistas con formación en ciencias naturales, sociales y de la salud. Aunque se plantea la necesidad de incorporar a más profesionistas purhépecha, la amplia mayoría sigue siendo no-indígena. Los programas de desarrollo realizados por el CESE –de agricultura orgánica, de salud comunitaria, de reciclaje de desperdicios urbanos y de apoyo a una unión de pescadores– se inscriben dentro de un marco teórico-metodológico que combina la educación popular con la promoción de un *ecodesarrollo* local y regionalmente autogestionado (Reyes/Esteva Peralta/Téllez Martínez 1990).

La colaboración entre CESE y ORCA se inicia bajo una evidente relación de tutela: la labor del CESE consiste en “ir gestando organizaciones solidarias entre sí y con su medio ambiente” (Reyes 1988). Por ello, y partiendo de su autodefinición como

“instancia de mediación, de apoyo y asesoría al movimiento social” (Villarreal/Oud 1992), para los protagonistas del CESE la función principal de la mesa directiva de ORCA y de su estrecha vinculación a los profesionistas del CESE es la de contribuir a formar futuros líderes de organizaciones purhépecha, para así volver prescindibles a los asesores externos. Con este propósito, ORCA y CESE han tenido un éxito importante; sin embargo, el problema que surge de este objetivo movilizador y formador consiste en la contradictoria relación entre la formación continua de cuadros purhépecha, por un lado, y el arraigo comunal de la mesa directiva de ORCA, por otro lado. Aquellos representantes comunales que se dedican prácticamente a tiempo completo a trabajar en ORCA, cuyo despacho está ubicado en Pátzcuaro, difícilmente pueden mantener el contacto con su propia asamblea comunal que ha delegado en ellos la función de representarla. Por otra parte, quienes sí se dedican a vincular estrechamente su comunidad con los proyectos concretos que ORCA lleva a cabo a nivel local, acaban abandonando el trabajo continuo de la mesa directiva de ORCA.

Para resolver esta tensión estructural entre profesionalización y representatividad, una ingeniosa reforma realizada entre 1989 y 1990 retoma el consuetudinario modelo comunal para aplicarlo a la organización regional. De la misma forma que en las comunidades la escasa continuidad en los cargos rotativos se procura contrarrestar con un gremio consultivo permanente –el cabildo de ancianos que reúne a los *cargos pasados*–, ORCA crea al margen de la mesa directiva un *grupo de apoyo* constituido por los anteriores miembros de la mesa y ex-representantes comunales, que gracias a su experiencia organizativa pueden formar y asesorar a los integrantes actuales de la mesa, cuyo carácter rotativo permite estrechar el arraigo local de la organización. A partir de esta reforma interna, ORCA puede independizarse cada vez más de la asesoría permanente brindada por el CESE.

La activa participación de miembros y ex-miembros de ORCA tanto en la refuncionalización de la comunidad purhépecha como en las “coaliciones de comunidades” que surgen a raíz de este proceso de recomunalización y que luego se establecerían en una nueva organización regional denominada *Nación Purhépecha/Ireti Porhépecha*, ilustran el éxito que este binomio de pautas organizativas ha tenido con su novedosa combinación entre formación de cuadros e implementación localmente adaptada de proyectos cada vez más concretos como fertilizantes orgánicos, viveros forestales, criaderos de pescado, estufas, etc.

“Reencuentros” en la sociedad civil

Aunque la centralidad del CESE como mecanismo mediador y asesor ha ido disminuyendo en los últimos años de movilización comunal y regional, su importancia ha aumentado como canal de articulación entre la subregión lacustre y la región purhépecha en general, por un lado, y el resto de la sociedad mexicana, por otro lado.

Sobre todo a través de su papel protagónico en la conformación de redes estatales –el *Foro Michoacano de la Sociedad Civil sobre Medio Ambiente y Desarrollo*– y nacionales de ONG –CESE es miembro fundador tanto de *Convergencia* como de *Alianza Cívica*–, la organización se ha convertido en un importante espacio de interrelación. Gracias a estas redes, los profesionistas purhépecha integrantes del CESE comienzan a participar en encuentros, plataformas y movilizaciones junto con miembros de otras ONG provenientes de regiones y contextos muy heterogéneos.

Esta paulatina superación del abismo entre ONG y organizaciones indígenas será fuertemente acelerada cuando en 1994 con el EZLN aparece un nuevo actor de composición básicamente indígena, pero que se caracteriza por un discurso dirigido antes que nada a la sociedad civil nacional (Nash 1997). Mientras muchas ONG se involucran en intermediar de forma tanto política como humanitaria entre los zapatistas y el Ejército Mexicano, paulatina y paralelamente surge una red informal de contactos que se van generando entre el *Comité Clandestino Revolucionario Indígena* del EZLN y las diversas coaliciones regionales de comunidades indígenas, vigorosas sobre todo en los estados del sur, sureste y occidente de México.¹¹ Estas novedosas alianzas con sectores no-indios de la población mexicana se consolidan a lo largo del año 1994 y sobre todo gracias a la *Convención Nacional Democrática* (CND), realizada a invitación del EZLN en territorio zapatista. Antes y después de esta Convención se llevan a cabo encuentros periódicos a diferentes niveles, en los que las organizaciones indígenas coordinan programas y estrategias con iniciativas de base procedentes de movimientos urbanos, organizaciones magisteriales y estudiantiles, representantes del movimiento feminista y con partidos políticos y sindicatos de la oposición (CND 1994).

Por ello, y a pesar de su escasa continuidad, estas plataformas sectoriales, estatales y nacionales de foros, asambleas y *convenciones democráticas*, directa o indirectamente impulsadas por el EZLN, constituyen un giro decisivo en la relación existente entre las ONG y los movimientos indígenas contemporáneos. No es únicamente la coincidencia de estrategias compartidas a lo largo de las negociaciones chiapanecas (Reygadas 1994; EZLN 1996), sino sobre todo la colaboración concreta y cotidiana, desplegada desde entonces a nivel intracomunal en varias regiones indígenas del país, la que simboliza una incipiente y a veces aún reticente confluencia entre ambos actores:

- Las autoridades locales así como los protagonistas de las coaliciones de comunidades, por un lado, reconocen la necesidad y urgencia de trascender la mera política de movilización para complementarla con una “política de proyectos”. Para iniciar este tipo de proyectos endógenos de desarrollo local,

¹¹ Estas alianzas, etnográficamente estudiadas para el caso purhépecha en Dietz (1999), también surgen en otras regiones indígenas; cfr. EZLN (1994), CNI (1995) y Leyva Solano (1999).

deliberadamente recurrirán a los conocimientos técnicos y a los contactos con agencias financiadoras que ya han sido establecidos por los representantes de las ONG. En diferentes regiones indígenas, se comienzan a crear fondos de desarrollo regional, autoadministrados por los representantes de las comunidades y asesorados por las ONG, que se surtirán de los recursos aportados tanto por las ONG partícipes como por los organismos internacionales e instituciones gubernamentales mexicanas que vienen realizando proyectos de desarrollo en estas regiones.¹²

- Los propios activistas de las ONG, por su lado, se verán paulatinamente sensibilizados –sobre todo gracias al discurso del EZLN frecuentemente dirigido a las ONG– para el concepto de autonomía. Este concepto, proveniente del zapatismo histórico (Warman 1988), promovido por las organizaciones indígenas, pero rechazado hasta entonces por las ONG, prevé la reestructuración de la sociedad mexicana en función del reconocimiento de la mencionada soberanía de las comunidades y de sus representaciones regionales frente a todo tipo de actor exógeno, gubernamental o no-gubernamental (CNI 1995; 1999). La declaración y el subsecuente establecimiento *de facto* de las primeras autonomías regionales obliga a las ONG a someter su política de proyectos a las nuevas instancias locales y regionales de toma de decisiones.¹³

Ambas pautas organizativas se benefician de esta colaboración, ya que en sus quehaceres cotidianos la comunidad indígena y su representación regional serán “profesionalizadas” gracias al decisivo apoyo obtenido por las ONG; éstas, por su parte, adquieren una mayor legitimación y aceptación intralocales por el mero hecho de que sus programas y proyectos específicos son sometidos –a menudo de forma obligada– a los mecanismos de toma de decisiones comunales vigentes. Una vez emancipada la intelectualidad indígena recomunalizada del paternalismo ejercido por el Estado-nación, la creciente implicación de las ONG en la política local y regional obligará a éstas a iniciar un semejante proceso de emancipación de la persistente tutela desplegada por sus contrapartes internacionales. El marco común de este acercamiento recíproco entre ONG y movimientos indígenas lo ofrece la convicción compartida por ambos de propiciar desde posiciones originalmente antagónicas una democratización y “ciudadanización” no sólo del Estado, sino de la sociedad civil hasta ahora monopolizada por dicho Estado.

¹² Los pioneros prototipos lo constituyen fondos y proyectos provenientes de los estados de Oaxaca (Servicios del Pueblo Mixe [s.f.]) y Guerrero (Benítez 1994; Matías Alonso 1995); para el caso purhépecha, ejemplos de este nuevo tipo de proyecto endógeno de desarrollo son aportados y analizados en Dietz (1997; 1999).

¹³ Las implicaciones políticas que a largo plazo conllevan la “autonomización” del Estado y la regionalización de los poderes públicos son analizadas para los casos mexicano y canadiense por Castro-Rea (1997).

Bibliografía

- Alatorre F., Gerardo/Aguilar, Jasmine G. (1994): "La identidad y el papel de las ONG's en el ámbito rural." En: *Revista Mexicana de Sociología*, 56.2: 159-163. México, D.F.
- Alonso Salmerón, Pedro (1993): "El proceso de organización de las comunidades indígenas en Michoacán." En: Arturo Warman/Arturo Argueta (eds.): *Movimientos indígenas contemporáneos en México*, pp. 15-34. México, D.F.: UNAM/Miguel Angel Porrúa.
- Álvarez Gándara, Miguel (1992): "Tendencias del movimiento popular acerca de la dependencia y la intermediación política." En: Jesús Tapia Santamaría (ed.): *Intermediación social y procesos políticos en Michoacán*, pp. 307-318. Zamora, Michoacán: El Colegio de Michoacán.
- Barre, Marie-Chantal (1983): *Ideologías indigenistas y movimientos indios*. México, D.F.: Siglo XXI.
- Bartra, Armando (1985): *Los herederos de Zapata: movimientos campesinos posrevolucionarios en México, 1920-1980*. México, D.F.: Era.
- (1992): "La ardua construcción del ciudadano (notas sobre el movimiento cívico y la lucha gremial)." En: Julio Moguel/Carlota Botey/Luis Hernández (eds.): *Autonomía y nuevos sujetos sociales en el desarrollo rural*, pp. 25-32. México, D.F.: Siglo XXI.
- Beck, Barbara (1991): "Die Stadt gehört allen und wir werden sie erobern": Basisdemokratische Bewegungen in Mexiko-Stadt nach der Erdbebenkatastrophe 1985." En: Wera Reusch/Antje Wiener (eds.): *Geschlecht – Klasse – Ethnie: Alte Konflikte und neue soziale Bewegungen in Lateinamerika*, pp. 168-182. Saarbrücken/Fort Lauderdale: Breitenbach.
- Benítez, José Manuel (1994): "Crean el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Guerrero." En: *La Jornada*, 24/11/94: 46. México, D.F.
- Bojórquez, Fernando/Cardoso, Rocío/Cardoso, Carmen [s.f.]: *La lucha por el agua*. Morelia, Michoacán: IMISAC.
- Calderón Alzati, Enrique/Cazés, Daniel (1996): *Las elecciones presidenciales de 1994*. México, D.F.: La Jornada – UNAM.
- Canabal Cristiani, Beatriz (1991): "Las organizaciones campesinas y la política del nuevo gobierno." En: *Cuadernos Agrarios*, N.E., 1 (enero-abril): 11-22. México, D.F.
- Canto Chac, Manuel (1991): "Los cristianos y los movimientos sociales en México." En: Víctor Gabriel Muro/Canto Chac, Manuel (eds.): *El estudio de los movimientos sociales – teoría y método*, pp. 175-194. Zamora, Michoacán: El Colegio de Michoacán/Universidad Autónoma de México Metropolitana – Xochimilco.
- Carr, Barry (1996): *La izquierda mexicana a través del siglo XX*. México, D.F.: Era.
- Castañeda, Jorge (1993): *La utopía desarmada: intrigas, dilemas y promesa de la izquierda en América Latina*. México, D.F.: Joaquín Mortíz.
- (1994): *Sorpresas te da la vida: México 1994*. México, D.F.: Aguilar.
- Castro-Rea, Julián (1997): *Autonomy and Integration in Mexico and Canada: lessons from the EU* (CBS Occasional Paper, 27). Copenhagen: Copenhagen Business School, Dept. of Intercultural Communication and Management.
- Cazés, Daniel (ed.) (1994): *Memorial del 68: relato a muchas voces*. México D.F.: Demos.
- Cervera Arce, Gabriela (1992): "Intermediarismo político y movimiento social: el caso del Comité de Productores Purépechas." En: Jesús Tapia Santamaría (ed.): *Intermediación*

- social y procesos políticos en Michoacán*, pp. 275-289. Zamora, Michoacán: El Colegio de Michoacán.
- CND (1994): *Convención Nacional Democrática: Resolutivos*. México, D.F.: CND.
- CNI (1995): "Convención Nacional Indígena: Declaración de la Montaña." En: *Ce-Acatl*, 67: 17-19. México, D.F.
- (1999): "Declaración política de la V Asamblea Nacional." En: *Memoria*, 123: 28-30. Madrid.
- Cook, María Lorena (1996): *Organizing Dissent: Unions, the State, and the Democratic Teachers' Movement in Mexico*. Pennsylvania: Penn State Press.
- Cornelius, Wayne A. (1996): *Mexican Politics in Transition: the Breakdown of a One-Party-Dominant Regime*. San Diego, California: UCSD/Center for U.S.-Mexican Studies.
- Dietz, Gunther (1995): *Teoría y práctica del Indigenismo: el caso del fomento a la alfarería en Michoacán, México*. Quito/México, D.F.: Instituto Indigenista Interamericano.
- (1996): "Del asistencialismo a la autonomía regional: los movimientos indígenas en México ante el desafío zapatista." En: *Boletín Americanista*, 46: 67-97. Barcelona.
- (1997): "Die indianische Dorfgemeinde als Entwicklungssubjekt: Selbstbestimmte Projekte der Purhépecha in Michoacán, Mexiko." En: Utta von Gleich (ed.): *Indigene Völker in Lateinamerika: Konfliktfaktor oder Entwicklungspotential?*, pp. 263-293. Frankfurt: Vervuert.
- (1999): "*La comunidad purhépecha es nuestra fuerza*": *etnicidad, cultura y región en un movimiento indígena en México*. Quito: Abya-Yala.
- Durand Ponte, Víctor Manuel (1994): "El movimiento por el respeto de los derechos humanos y la transición política". En: Víctor Manuel Durand Ponte, et al.: *La construcción de la democracia en México: movimientos sociales y ciudadanía*, pp. 288-318. México D.F.: Siglo XXI.
- EZLN (1994): *Chiapas - la palabra de los armados de verdad y fuego: entrevistas, cartas y comunicados del EZLN*. Barcelona: Ediciones del Serbal.
- (1996): *Crónicas intergalácticas: Primer Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo*. México, D.F.: Planeta Tierra.
- Foweraker, Joe (1993): *Popular Mobilization in Mexico: the Teachers' Movement, 1977-87*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Fox, Jonathan/Hernández, Luis (1992): "Mexico's Difficult Democracy: Grassroots Movements, NGOs, and Local Government." En: *Alternatives*, 17: 165-208. Boulder, Colorado.
- García, Emilio (1991): "Estrategia modernizante y perfil del movimiento campesino en el último cuarto del siglo XX." En: *Cuadernos Agrarios*, N.E., 1: 23-38. México, D.F.
- Harvey, Neil (1990): *The New Agrarian Movement in Mexico, 1979-1990*. London: University of London, Institute of Latin American Studies.
- (1993): "The Limits of Concertation in Rural Mexico." En: Neil Harvey (ed.): *Mexico: Dilemmas of Transition*, pp. 199-217. London: British Academic Press/University of London.
- Leyva Solano, Xochitl (1999): "Autonomías en zonas de conflicto armado: el caso de Ocosingo y las Cañadas de la Selva Lacandona." En: *Memoria*, 123: 4-10. Madrid.
- Matías Alonso, Marcos (1995): *Cimentando las bases sociales para el desarrollo regional indígena*. México: Ce-Acatl, A.C./Altepetl Nahuas de la Montaña de Guerrero, A.C.

- Martínez Borrego, Estela (1991): *Organización de productores y movimiento campesino*. México, D.F.: Siglo XXI.
- Mejía Piñeros, María Consuelo/Sarmiento Silva, Sergio (1987): *La lucha indígena: un reto a la ortodoxia*. México, D.F.: Siglo XXI.
- Moguel, Julio (1992): "Crisis del capital y reorganización productiva en el medio rural (notas para la discusión de los pros, contras y asegunes de la apropiación del proceso productivo)." En: Julio Moguel/C. Botey/Hernández, Luis (eds.): *Autonomía y nuevos sujetos sociales en el desarrollo rural*, pp.15-24. México, D.F.: Siglo XXI.
- Monsiváis, Carlos (1987): *Entrada libre: crónicas de la sociedad que se organiza*. México, D.F.: Era.
- Muro, Víctor Gabriel (1994): "Grupos cristianos y movimientos campesinos en México." En: *Revista Mexicana de Sociología*, 56.2: 165-175. México, D.F.
- Nash, June (1997): "The Fiesta of the Word: the Zapatista uprising and radical democracy in Mexico." En: *American Anthropologist*, 99.2: 261-274. Washington, D.C.
- Núñez, Oscar (1990): *Innovaciones democrático culturales del Movimiento Urbano Popular: ¿hacia nuevas culturas locales?* México, D.F.: Universidad Autónoma Metropolitana – Azcapotzalco.
- ORCA (1992): "Organización Ribereña contra la Contaminación del Lago de Pátzcuaro, A.C." En: Pedro Alvarez Icaza, et al. (compils.): *Las organizaciones campesinas e indígenas ante la problemática ambiental del desarrollo*, pp. 145-147. Texcoco, México: PAIR.
- Otero, Gerardo (1989): "The New Agrarian Movement: Self-managed, Democratic Production." En: *Latin American Perspectives*, 16.4 (63): 28-59. Riverside, California.
- Paré, Luisa (1990): "The Challenge of Rural Democratization in Mexico." En: Jonathan Fox (ed.): *The Challenge of Rural Democratization: Perspectives from Latin America and the Philippines*, pp. 79-96. London: Frank Cass.
- Pizá, Antonio (1988): "La experiencia en organización y educación popular de la ORCA." En: Anke van Dam, et al. (eds.): *Educación popular en América Latina: la teoría en la práctica*, pp. 153-164. La Haya: CESO.
- Reyes, Javier (1988): "Ecodesarrollo y educación popular." En: Anke van Dam, et al. (eds.): *Educación popular en América Latina: la teoría en la práctica*, pp. 130-152. La Haya: CESO.
- Reyes, Javier/Esteva Peralta, Joaquín/Téllez Martínez, Arturo (1990): "El ecodesarrollo, la investigación participativa y la educación popular en la región de Pátzcuaro". En: Enrique Leff/Julia Carabias/A. I. Batis (eds.): *Recursos naturales, técnica y cultura: estudios y experiencias para un desarrollo alternativo*, pp. 357-373. México, D.F.: UNAM.
- Reygadas, Rafael (1994): "De cara al imaginario zapatista." En: Mario B. Monroy (ed.): *Pensar Chiapas, repensar México: reflexiones de las ONGs mexicanas sobre el conflicto*, pp. 213-233. México, D.F.: Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia.
- Rosa, Martín de la (1982): "La investigación participativa y la organización campesina." En: IMISAC (ed.): *La organización campesina y los problemas de la investigación participativa: encuentro nacional sobre investigación participativa en el medio rural*, pp. 19-34. Morelia, Michoacán: IMISAC.
- Servicios del Pueblo Mixe [s.f.]: *Fondo de Autopromoción para el Desarrollo Económico Mixe*. Oaxaca: Servicios del Pueblo Mixe, A.C.

- Tamayo, Jaime (1990): "Neoliberalism Encounters *Neocardenismo*." En: Joe Foweraker/Ann L. Craig (eds.): *Popular Movements and Political Change in Mexico*, 121-136. Boulder, Colorado/London: Lynne Rienner Publishers.
- Toledo, Víctor M. (1992): "Toda la utopía: el nuevo movimiento ecológico de los indígenas y campesinos de México." En: Julio Moguel/Carlota Botey/Luis Hernández (eds.): *Autonomía y nuevos sujetos sociales en el desarrollo rural*, pp. 33-51. México, D.F.: Siglo XXI.
- Villarreal, Magdalena/Oud, Peter (1992): *Centro de Estudios Sociales y Ecológicos, A.C. (CESE) - informe de evaluación*. Pátzcuaro, Michoacán: CESE.
- Warman, Arturo (1988): "The Political Project of Zapatismo." En: Friedrich Katz (ed.): *Riot, Rebellion, and Revolution: Rural Social Conflict in Mexico*, pp. 321-337. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Zermeño, Sergio (1993): "Intellectuals and the Mexican State in the 'Lost Decade'." En: Neil Harvey (ed.): *Mexico: Dilemmas in Transition*, pp. 279-298. London: British Academic Press/University of London.
- (1994): "Estado y sociedad en el neoliberalismo dependiente." En: *Revista Mexicana de Sociología*, 56.4: 109-132. México, D.F.
- (1996): *La sociedad derrotada: el desorden mexicano del fin de siglo*. México, D.F.: UNAM-IIS, Siglo XXI.